JORNADAS SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Valladolid, 30 y 31 de octubre de 2003
Museo Patio Herreriano

COMUNICACIÓN de la organización de las Jornadas sobre la Ley de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad:

Este proyecto, impulsado por Entidades relacionadas con personas con discapacidad, ha obtenido una excepcional unanimidad de todos los grupos políticos en su tramitación parlamentaria. El espíritu social de esta ley une las voluntades de todos. La valoración del proyecto de ley estudiado es sumamente positiva: fomenta la formación de recursos a favor de la persona con discapacidad, permite la liberación de recursos de las Administraciones Públicas, que se ven sustituidos por aportaciones de familiares, de terceros o de las propias personas con discapacidad. Medida que beneficia directamente a un colectivo que se puede estimar en 430.000 personas, y da un giro muy importante en la orientación de la legislación: se parte de un concepto más realista, centrado en la situación de discapacidad, frente al concepto estrictamente jurídico de incapacitación.

Se hace precisa una mayor especialización de los órganos judiciales, y la incorporación de equipos pluridisciplinarios y medios materiales, a tales órganos judiciales y al ministerio fiscal, con las consiguientes medidas presupuestarias, que permitan una mayor eficacia de las actuaciones judiciales relacionadas con el mundo de la discapacidad.

Por otro lado, el procedimiento de incapacitación, en la actualidad contradictorio, debe ser sustituido por otro más flexible, llevando a la práctica la previsión legal de adaptar la sentencia a la capacidad de cada persona con discapacidad, y revisando su contenido cuando se modifiquen las circunstancias.

Se haría necesaria la regulación de la responsabilidad patrimonial que corresponde al Patrimonio Protegido de la Persona con Discapacidad, que, con arreglo a su naturaleza, ha de ser especial y subsidiaria respecto del patrimonio general de la persona con discapacidad, intensificando la separación y las características del patrimonio de destino.

Es necesario un adecuado sistema fiscal que promueva la constitución de Patrimonios Protegidos y la aportación de bienes que lo integran, para que esta figura cumpla su finalidad real.

La supresión del requisito de subasta en las enajenaciones de bienes debe ampliarse a todos los supuestos de transmisión de bienes de personas con discapacidad.

Es precisa una unificación o integración de los diversos archivos donde se publican los actos jurídicos relacionados con situaciones de la propia discapacidad de las personas (autotutela, poderes preventivos, ...), a través de un archivo administrativo de alcance nacional, que ayude al conocimiento de cuál es el último documento otorgado y su contenido.

Es esencial un desarrollo rápido y completo del Reglamento de la futura Ley del Patrimonio Protegido de la Persona con Discapacidad, y de los instrumentos necesarios para alcanzar la aplicación práctica de los fines previstos en el proyecto, así como los recursos necesarios para ello.

En conclusión: debe evitarse el aspecto negativo de falta de capacidad, resaltando las capacidades que, aunque limitadas, pueda tener cada persona.

Valladolid, a 31 de octubre de 2003.